vo de la Audiencia Nacional, entre partes, de una, como demandante, don Luis Cuesta Muñoz, quien postula por sí mismo, y de otra, como demandada, la Administración Pública, representada y defendida por el señor Abogado del Estado, contra la desestimación, presunta producida por silencio administrativo del Ministerio de Justicia, del recurso de reposición interpuesto contra el acto de retención por sanción verificado a través de la Habilitación de Personal, con cuantía de 49.409 pesetas, se ha cictado sentencia, con fecha 5 de abril de 1983, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que estimando en parte el actual recurso contenciose administrativo, interpuesto como demandante por don Luis Cuesta Muñoz frente a la demandada Administración General Cuesta Munoz irente a la demandada Administración General del Estado, contra los actos administrativos del Ministerio de Justicia a los que la demanda se contrae; debemos declarar y declaramos no ser conformes a derecho, y, por consiguiente, anulamos los referidos actos administrativos al presente impugnados, debiendo la Administración demandada devolver integramanes, deplemo la Administración demandada devolver integra-mente, a las partes hoy actora, la cantidad que indebidamente le fue retenida, desestimando el resto de las pretensiones que la demanda actúa todo ello, sin hacer una expresa declaración de condena en costas, respecto de las derivadas del actual proceso jurisdiccional.

Ası por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos v

En su virtud de conformidad con lo establecido en la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27 de orciombre de 1956, este Ministerio ha acordado que se cum-

pla en sus propios términos la expresada sentencia.

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y demás efectos.

Lios guarde a V. I. muchos años.

Madrid, 6 de febrero de 1984.—P. D. el Subsecretario, Liborio

Hierro Sánchez Pescador.

llmo. Sr Secretario Técnico de Relaciones con la Administración de Justicia.

ORDEN de 8 de febrero de 1984 por la que se da cumplimiento a la sentencia dictada por la Sala 7461 de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, recaida en el recurso contencioso-admi-nistrativo interpuesto por doña María del Carmen

Cadavid Huerta y diez más. Ilmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo, seguido en única instancia ante la Sala de lo Contencioso-Administraen única instancia ante la Sala de lo Contencioso-Administra-tivo de la Audiencia Nacional, entre partes, de una, como de-mar dantes, María del Carmen Cadavid Huerta, Jerónimo Pa-dilla Ortí, Juan Antonio Pardo García, Luis María Pérez García, Francisco Javier Orejas Arranz, Marina Esteban Ranilia, María Antonia Bayona Sarriá, Pilar López Rubio, María del Carmen Ma, tin Cristóbal, Celia Moreno Martín, Angelines Avilés Caba-llero, Francisco Javier Pérez Robles, quienes postulan por sí mismos, y de otra, como demandada, la Administración Pública, representada y defendida por el señor Abogado del Estado, con-tra la desestimación presunta producida por ellencio adminis-

rea la desestimación presunta, producida por silencio administrativo del Ministerio de Justicia, del recurso de reposición interpuesto contra el acto de retención por sanción, verificado a través de la Habilitación de Personal; en cuantías no determinadas se ha dictado sentencia con fecha 20 de julto de 1983, cuya parte dispositiva es como sigue:

cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fall» mos: Que rechazando la causa de inadmisibilidad opuesta por el señor Abogado del Estado, y estimando en parte el actual recurso contencioso-administrativo, interpuesto como demandantes por doña Maria del Carmen Cadavid Huerta, don Jerónimo Padilla Ortí, don Juan Antonio Pardo García don Luis María Pérez García, don Francisco Javier Orejas Arranz, doña Maria Esteban Ranilia, doña Maria Antonia Bayona Sariá, doña Pilar López Rubio, doña María del Carmen Martín Cristóbal, doña Celia Moreno Martín, doña Angelines Avilés Caballero, don Francisco Javier Pérez Robles; frente a la demandade Administración General del Estado, contra los actos administrativos del Ministerio de Justicia a los que la demanda se contrae, debemos declarar y declaramos no ser conformes a derecho, y, por consiguiente, anulamos los referidos actos administrativos al presente impugnados, debiendo la Administración demandada devolver integramente, a los recurrentes, la cantidad que indebidamente le fue retenida, desestimando el resto de las pretensiones que la demanda actúa, todo ello, sin hacer una las pretensiones que la demanda actúa, todo ello, sin hacer una expresa declaración de condena en costas, respecto de las derivada: del actual proceso jurisdiccional.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos

En su virtud, de conformidad con lo establecido en la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa de 27 de diciembre de 1956, este Ministerio ha acordado que se cumpla en sus propios términos la expresada sentencia.

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde a V. I. muchos años.

Madrid, 6 de febrero de 1984.—P. D., el Subsecretarlo, Liborio Hierro Sánchez-Pescador.

Ilmo Sr. Secretario Técnico de Relaciones con la Administración de Justicia

ORDEN de 6 de febrero de 1984 por la que se da cumplimiento a la sentencia dictada por la Sala 7462 de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, recatda en el recurso contencioso-admi-nistrativo interpuesto por don Alfonso Ortiz Ortiz.

limo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo, seguido en única instancia ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo en unica instancia ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, entre partes, de una, como demandante, don Alfoso Ortiz Ortiz, quien postula por sí mismo, y de etra, como demandada, la Administración Pública, representada y defendida por el señor Abogado del Estado, contra la desestimación presunta, producida por silencio administrativo del Ministerio de Justicia, del recurso de reposición interpuesto de relacion de retorios de respectos en través de contra el acto de retención por sanción, verificado a través de la Habilitación de Personal; con cuantía de 42.450 pesetas, se na dictedo sentencia con fecha 16 de septiembre de 1983, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que estimando en parte el actual recurso contencioso administrativo, interpuesto como demandante por don Alfonso Ortiz Ortiz, frente a la demandada Administración General del Estado, contra los actos administrativos del Ministerio de Justicia, a los que la demanda se contrae; debemos declarar y declaramos no ser conformes a derecho, y por consiguiente, anulamos los referidos actos administrativos al presente impugnados, debiendo la Administración demandada devolver integramente, a la parte hoy actora, la cantidad que indebidamente le fue retenida, desestimando el resto de las pretensiones que la demanda actúa; todo ello sin hacer una expresa declaración de condena en costas respecto a las derivadas del actual proceso jurisdiccional. proceso jurisdiccional.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos v firmemos.

En su virtud, de conformidad con lo establecido en la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, este Ministerio ha acordado que se cumpla en sus propios términos la expresada sentencia.

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde a V. I. muchos años.

Madrid, 6 de febrero de 1984.—P. D., el Subsecretario, Liborio Hierro Sánchez-Pescador.

Ilme, Sr. Secretario Técnico de Relaciones con la Administración de Justicia

ORDEN de 6 de febrero de 1984 por la que se da cumplimiento a la sentencia dictada por la Sala 7463 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, recalda en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don José Ortiz Ortiz.

Ilmo Sr.: En el recurso contencioso-administrativo, seguido en única instancia ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, entre partes, de una, como demandante, don José Ortiz Ortiz, quien postula por sí mismo, y de otra, como demandada, la Administración Pública, representada y defendida por el señor Abogado del Estado, contra la desestimación presunta producida por silencio administrativo del Ministeric de Justicia, del recurso de reposición interpuesto contra el acto de retención por sanción, verificado a través de la Habilitación de Personal; con cuantía de 4.282 pesetas, se ha diotado sentencia con fecha 23 de septiembre de 1983, cuya parte dispositiva es como sigue:

\*Fallamos: Que estimando en parte el actual recurso contencioso-administrativo, interpuesto como demandante por don José Ortiz Ortiz, frente a la demandada Administración General del Estado, contra los actos administrativos del Ministerio de Justicia a los que la demanda se contrae, debemos declarar y declaramos no ser conformes a derecho, y, por consiguiente, anulamos los referidos actos administrativos al presente impugnados, debiendo la Administración demandada devolver integramente, a la parte hoy actora, la cantidad que indebidamente le fue retenida, desestimando el resto de las pretensiones que la demanda actúa, todo ello, sin hacer una expresa declaración de condena en costas, respecto de las derivadas del actual proceso jurisdiccional. proceso jurisdiccional.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

En su virtud, de conformidad con lo establecido en la Ley eguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27 de ciciembre de 1958, este Ministerio ha acordado que se cumpla en sus propios términos la expresada sentencia.

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde a V. I. muchos años.

Madrid, 6 de febrero de 1984.—P. D., el Subsecretario, Liborio Hierro Sánchez-Pescador.

Ilmo. Sr Secretario Técnico de Relaciones con la Administración de Justicia